



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Orden por la que se regula la organización y funcionamiento del registro de órganos de representación del personal en la Administración General del Estado, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

El Proyecto sometido a informe tiene por objeto la regulación del Registro de Órganos de Representación del Personal al Servicio de la Administración General del Estado, creado por el artículo 13 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, configurado, según la Exposición de Motivos, como “un instrumento de gestión que ha de proporcionar a esta Administración una información exhaustiva y actualizada de todos los datos relativos a los órganos de representación del personal que en su ámbito se constituyan, con la finalidad de facilitar el ejercicio de las funciones que tienen legal y convencionalmente atribuidas”, a cuyo efecto se inscribirán “los actos relativos al ejercicio de derechos derivados de la representación del personal al servicio de la Administración, de tal modo que estos derechos sean ejercidos conforme al contenido de su inscripción en dicho Registro”.

En particular, el artículo 13.2 del mencionado Real Decreto Ley dispone que serán inscribibles en el Registro de la Administración General del Estado los actos que afecten a la “creación, modificación y supresión de órganos de representación del personal funcionario, estatutario o laboral: Juntas de personal, Delegados de Personal, Comités de Empresa y Comités de seguridad y salud”, el “número e identidad de los miembros de los citados



órganos, así como las variaciones que se produzcan respecto de los mismos”, la “creación, modificación o supresión de secciones sindicales, así como número e identidad de los correspondientes delegados”, las “cesiones de créditos horarios legal o convencionalmente establecidos que den lugar a la dispensa total o parcial de asistencia al trabajo” y las “liberaciones institucionales que deriven, en su caso, de lo dispuesto en normas, pactos o convenios y cualquier otra modificación en la obligación o en el régimen de asistencia al trabajo que pueda traer causa de lo establecido en disposiciones legales y convencionales que resulten de aplicación”, teniendo a tenor del artículo 13.4 la inscripción carácter constitutivo salvo en lo referente a los miembros de los órganos de representación sindical y delegados sindicales y pudiendo el órgano responsable del Registro “motivadamente, rechazar la inscripción o anotación de una resolución cuando aprecie posibles vicios de legalidad en la misma, poniéndolo en conocimiento del órgano del que procedan a fin de que se adopten las medidas necesarias”. En todo caso, conforme al artículo 13.6 se establece que “la gestión de dicho Registro se ajustará a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal”.

El Proyecto sometido a informe regula la organización y gestión del Registro, los asientos que configurarán el mismo, el procedimiento de inscripción y el acceso a la información contenida en el Registro, procediéndose asimismo a la creación del fichero de datos personales asociado al Registro.

Como cuestión previa, es preciso señalar que el registro contendrá datos relacionados con la afiliación sindical de los miembros de los órganos de personal y de los delegados sindicales, dado que incluso cuando los primeros no se encontrasen afiliados a un determinado sindicato sí habrán concurrido al proceso electoral en el marco de una determinada candidatura, lo que revelará su afinidad con la misma.

Pues bien, la transmisión de estos datos por parte de las mesas electorales o de las organizaciones sindicales, en los términos establecidos en los apartados 2 y 4 del artículo 9 del Proyecto sometido a informe supondrá una cesión o comunicación de datos relacionados con la afiliación sindical de los representantes, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 15/1999, cuyo primer inciso dispone que “sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias”. De este modo, el mero hecho de la existencia de



una norma con rango de Ley habilitante de la cesión no sería, en principio aparentemente suficiente para que procediese la misma.

Sin embargo debe tenerse en cuenta que, a diferencia de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, de la que viene a ser transposición la Ley Orgánica 15/1999, establece un régimen menos estricto en lo que respecta al tratamiento de datos especialmente protegidos.

Así, tras establecer el artículo 8.1 de la Directiva que “los Estados miembros prohibirán el tratamiento de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de los datos relativos a la salud o a la sexualidad”, el artículo 8.2 establece determinadas salvedades a ese régimen general de prohibición, de forma que esta regla no sería aplicable cuando “el interesado haya dado su consentimiento explícito a dicho tratamiento, salvo en los casos en los que la legislación del Estado miembro disponga que la prohibición establecida en el apartado 1 no pueda levantarse con el consentimiento del interesado” (apartado a), o cuando “el tratamiento se refiera a datos que el interesado haya hecho manifiestamente públicos o sea necesario para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un procedimiento judicial (apartado e).

Por otra parte, debe igualmente tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional ha venido a matizar el criterio terminante establecido en el artículo 7.2 citado en relación con determinados datos especialmente protegidos. Así, la Sentencia 85/2003, de 8 de mayo, se refiere a si la utilización de los datos relacionados con la condición de candidatos en comicios electorales de determinados sujetos y su tratamiento posterior podría resultar contrario al artículo 18.4 de la Constitución, al vulnerarse el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, señalando en el fundamento jurídico 21 de la citada sentencia que:

*“Tampoco puede considerarse vulnerado el derecho fundamental a la protección de datos (art. 18.4 CE), que faculta a los ciudadanos para oponerse a que determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aquél legítimo que justificó su obtención (STC 94/1988, de 24 de mayo, F. 4). Tal derecho persigue garantizar a las personas un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y su destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y*



*derecho del afectado (STC 292/2000, de 30 de noviembre, F. 6). Pero ese poder de disposición no puede pretenderse con respecto al único dato relevante en este caso, a saber, la vinculación política de aquellos que concurren como candidatos a un proceso electoral pues, como hemos dicho, se trata de datos publicados a los que puede acceder cualquier ciudadano y que por tanto quedan fuera del control de las personas a las que se refieren. La adscripción política de un candidato es y debe ser un dato público en una sociedad democrática, y por ello no puede reclamarse sobre él ningún poder de disposición.”*

De lo citado en el artículo 8.2 e) de la Directiva y en la doctrina del Tribunal Constitucional que acaba de reproducirse parece deducirse que la limitación establecida por el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 15/1999 no puede entenderse como absoluta, sino que deberá quedar modulada por la garantía de otros derechos fundamentales, tomando en particular en consideración el hecho de que la vinculación del interesado con el dato especialmente protegido es públicamente conocida.

En este sentido, cabría considerar que el hecho de ostentar la condición de miembro de los órganos de personal o delegado sindical reviste una trascendencia pública que justifica la licitud del tratamiento de los datos relacionados con los mencionados afectados, lo que legitimaría que los datos correspondientes a los interesados sean incorporados al Registro regulado en el Proyecto sometido a informe, sin que dicha incorporación y la previa comunicación por los responsables a los que se refiere el artículo 9 del Proyecto pueda ser considerada contraria a derecho.

La consideración que acaba de razonarse conlleva a que pueda considerarse, en general, que lo dispuesto en el articulado del Proyecto objeto de informe es conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999. No obstante, se hace preciso efectuar determinadas observaciones en relación con el articulado y, especialmente, con la creación por medio del Anexo del fichero asociado al Registro.

En cuanto al articulado, se aprecia cierta contradicción en relación con las medidas de seguridad que resultarán de aplicación. En este punto, el artículo 3.3 impone el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, lo que exige la implantación de las medidas de nivel alto establecidas en el mencionado Reglamento, dado que el hecho de que sea posible el tratamiento de datos de afiliación sindical no priva al Registro de esa naturaleza.

Sin embargo, frente a lo que acaba de indicarse la norma de creación del fichero dispone que esas medidas serán las de nivel básico, lo que debería corregirse, dado que procede, ya se ha dicho, la implantación de las medidas de nivel alto.

Por otra parte, el artículo 13 señala que únicamente se procederá a la publicación de un boletín estadístico, sin que figuren datos de carácter personal. En este punto será preciso que el nivel de agregación de la información del citado boletín sea tal que impida en todo caso la identificabilidad indirecta de los representantes sindicales o beneficiarios de los créditos o licencias objeto de inscripción.

En cuanto al resto del contenido del Anexo, sería preciso que se especificasen con mucho mayor detalle, al menos por remisión a los preceptos en que se regulan estas cuestiones, tanto la delimitación del colectivo cuyos datos serán objeto de tratamiento como la estructura y datos que incorporará el fichero. Igualmente debería detallarse los orígenes de los datos en los términos previstos en el artículo 9 del Proyecto.